

JUZGADO TREINTA Y SIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021)

Proceso declarativo de **PAOLA ANDREA SIERRA GOMEZ, LEONARDO FABIO SIERRA GODOY, ANA SOFIA SIERRA SIERRA, y, MARTHA CECILIA GOMEZ VALCARCEL** contra la **SOCIEDAD DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL TRANSPORTADOR SAS EN LIQUIDACION. (LLAMADO EN GARANTÍA SEGUROS DEL ESTADO S.A.)**, radicado con el N° **110014003037201900063 00**.

ANTECEDENTES

1. A través del libelo radicado en este Juzgado el día 24 de abril de 2019, los accionantes pidieron declarar al demandado civil y extracontractualmente responsable de los daños sufridos por Paola Andrea Sierra Gómez como consecuencia del accidente ocurrido el día 18 de febrero de 2017, tras su participación en una atracción denominada “*pelotas saltarinas*” que se desarrolló en las instalaciones del restaurante perteneciente a la demandada.

A raíz de lo anterior, pidieron condenar al extremo pasivo al pago a favor de Paola Andrea Sierra Gómez de \$1'713.300 como daño emergente, correspondiente a las cantidades que por concepto de medicamentos y desplazamiento a terapias, más \$10'328.816 a título de lucro cesante.

También reclamaron el reconocimiento de perjuicios morales estimados en 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para Paola Andrea Sierra Gómez; para Leonardo Fabio Sierra Godoy y la menor Ana Sofia Sierra Sierra el equivalente a 30 SMLV cada uno, y 10 SMLV para Martha Cecilia Gómez Valcárcel.

Así mismo, pidieron el reconocimiento de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la señora Sierra Gómez por concepto de daño a la salud y por daño a la vida de relación para ella y su esposo Sierra

Godoy, la cuantía equivalente a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes a cada uno.

2. Fundaron sus pedimentos en que Paula Andrea Sierra Gómez, junto con su hija menor Ana Sofía Sierra Sierra y su señora Madre Martha Cecilia Gómez Valcárcel, así como otros familiares, acudieron a departir en el restaurante de propiedad de la demandada el día 18 de febrero de 2017. Encontrándose allí, resolvieron participar de algunas atracciones ofrecidas al interior del establecimiento, entre ellas, la denominada “*pelotas saltarinas*”, para la cual pagaron el precio de una boleta que se ofrecía en dicho sitio.

Se precisó en la demanda que Paula Andrea Sierra ingresó al terreno de juego luciendo unas “*botas de caña alta*”, sin que se hubiera hecho alguna advertencia o reparo para ingresar con ese tipo de calzado.

Estando en desarrollo el juego, la señora Sierra Gómez pone el pie derecho en un terreno que no tenía pasto, sufriendo una caída que a la vez le generó fractura del miembro inferior derecho, concretamente una “*salida del hueso*”.

Señaló que tras el insuceso se percataron que el terreno era irregular, no estaba en condiciones aptas para el desarrollo de un juego como el señalado.

Igualmente, mencionaron que no recibieron en el instante una atención adecuada de parte del personal del establecimiento de comercio, al punto que tuvieron que desplazarse a una institución hospitalaria para que le brindaran la atención médica necesaria en su propio vehículo, sin advertir que se advirtiera gestión alguna de parte de los dueños o empleados del restaurante para atenderla adecuadamente y transportarla a un centro sanitario.

También se expresó que luego de haber recibido atención inicial en un hospital de Cota, se remitió a la Fundación Santa Fe donde se le diagnosticaron fracturas en el miembro inferior izquierdo y se decidió realizar una cirugía denominada “*reducción cerrada*”. Más adelante, el 25

de febrero de 2017 se le efectuó otra intervención quirúrgica y durante el año 2017, incluso en el año 2018, se le practicaron otros procedimientos, lo cual dio lugar a que ella tuviera que permanecer mucho tiempo en cama y una vez se logró mayor recuperación, se desplazara con apoyo de un bastón.

Adicionalmente, señalaron que la señora Sierra Gómez tenía que realizar terapias físicas para recuperar su movilidad y de todos modos, ha quedado con secuelas que han generado limitaciones en su extremidad inferior derecha, que han sido catalogadas como permanentes.

Se refirió que la vida familiar que hasta antes del accidente transcurría con normalidad, situación que se vio truncada con el siniestro porque dejó de disfrutar el tiempo con su hija menor, tampoco pudo seguir compartiendo las mismas cosas con su esposo y demás familiares y, en general, las limitaciones de movimiento y comunión de la víctima han ocasionado sentimientos de congoja en todo el entorno afectivo.

De la misma manera se indicó que al momento del accidente Paola Andrea Sierra Gómez ella laboraba como administradora de propiedad horizontal, devengando una mensualidad de \$1'627.000, los cuales dejó de percibir durante su incapacidad.

3. Admitida la demanda por auto del 21 de febrero de 2019, del mismo se notificó la sociedad demandada y excepcionó *“cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa y responsabilidad del daño”*. Ésta a su vez llamó en garantía a Seguros del Estado S.A., quien frente a la demanda propuso las excepciones de *“perjuicios o daños inexistentes”*, *“hecho exclusivo de la víctima”*, y contra el llamamiento propuso las que denominó *“límite máximo del valor asegurado y deducible”*, *“la cobertura otorgada por las pólizas se encuentra circunscrita a las condiciones especificadas en las mismas”* y *“cumplimiento de garantías”*.

4. Acto seguido se realizó la audiencia de que tratan los artículos 372 y 373 del C.G.P., en la que entre otras, se practicaron las pruebas y se corrió traslado para alegar, oportunidad de la cual hicieron uso las partes.

CONSIDERACIONES

1.- Cumplidos se encuentran los llamados presupuestos procesales.

2.- No se evidencia vicio alguno que invalide lo actuado, por lo que se proferirá decisión de mérito.

3.- De acuerdo con lo señalado en el libelo demandatorio, la parte actora acudió a la jurisdicción para obtener que se declare que la sociedad demandada, en su calidad de propietaria del establecimiento de comercio denominado Museo Bar El Transportador, es responsable civil y extracontractualmente por los perjuicios materiales e inmateriales causados con ocasión del accidente ocurrido el 18 de febrero de 2017, en el cual la señora Paola Andrea Sierra Gómez resultó lesionada al participar en la atracción denominada “bola humana”, ubicada en los predios donde funciona el mencionado establecimiento.

Así las cosas, tenemos que lo pretendido es la declaratoria de responsabilidad civil extracontractual más exactamente la normada en el artículo 2347 del Código Civil, responsabilidad por el hecho ajeno o de otro, es decir, por haberlo realizado otra persona que está bajo su control o dependencia; responsabilidad extracontractual indirecta denominada también refleja o de derecho que ocurre cuando alguien es llamado por la ley a responder frente a terceros por las secuelas nocivas de actividades desarrolladas por otros.

En tratándose de responsabilidad extracontractual por el hecho ajeno, el artículo 2347 CCC., señala que:

“Toda persona es responsable, no sólo de sus propias acciones para el efecto de indemnizar el daño sino del hecho de aquellos que estuvieren a su cuidado. Así, los padres son responsables solidariamente del hecho de los hijos menores que habiten en la misma casa. Así, el tutor o curador es responsable de la conducta del pupilo que vive bajo su dependencia y cuidado.

Así, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discípulos mientras están bajo su cuidado, y los artesanos y empresarios del hecho de sus aprendices, o dependientes, en el mismo caso. Pero cesará la responsabilidad de tales personas, si con la autoridad y el cuidado que su respectiva calidad les confiere y prescribe, no hubieren podido impedir el hecho.”

4.- De acuerdo con la Doctrina y la Jurisprudencia, para que se pueda hablar de Responsabilidad Civil Extracontractual, se requiere acreditar tres elementos a saber: a. Que ocurra un hecho que genere un daño o perjuicio; b. Que exista culpa atribuible al causante del daño; y por último, c. Que exista un nexo de causalidad entre el hecho culposo y el daño.

“Por daño debe entenderse aquel menoscabo que sufre un sujeto de derecho en su persona o patrimonio y para que sea indemnizable debe ser directo y cierto, además debe ser susceptible de indemnización.

La culpa se presenta cuando el actor prevé el daño que puede ocasionar con un acto suyo, pero confía evitarlo; o cuando simplemente no lo prevé pudiendo hacerlo; así mismo cuando actúa con negligencia o imprudencia.

El nexo causal apunta a que el daño generado debe ser producto de la realización de aquella conducta culposa endilgada a quien se señaló como responsable, esto es, que debe ser la consecuencia de ella, pues no existiendo hecho dañoso o si este se realizó sin culpa, el nexo en comento se rompe y en tal caso, el demandado no está llamado a indemnizar”¹.

5.- En el asunto *sub lite* se encuentra probado que, el día 18 de febrero de 2017, la señora Paola Andrea Sierra Gómez en compañía de Omar Ocampo, Martha Cecilia Gómez, Milton Sierra, Gina Bohórquez y Ana Sofia Sierra, acudieron al restaurante Museo Bar El Transportador SAS., en Liquidación, tal como lo ratificaron estos últimos al rendir su declaración en la audiencia de instrucción y juzgamiento.

Allí, en el lugar destinado para el juego de pelotas (lugar del accidente que no fue controvertido por la parte demandada) ella sufrió según lo consigna la historia clínica, “*fractura del maléolo externo, fractura del maléolo interno, ruptura de ligamento a nivel del tobillo y del pie, y luxación de la articulación del tobillo*”, toda vez que “*mi cuerpo giró y el pie se enterró y al girar se rompen todos los huesos de la rodilla hacia abajo (...) al momento de caer, la parte de la rodilla hacia el tobillo se sale, el tobillo queda torcido y el pie queda en la parte interna*” por lo cual debió

¹ TSDJ Bogotá -Sala Civil- 29 de agosto de 2013 -rad. 110013103 037-2011002060. MP. Álvaro Fernando García Restrepo

ser intervenida quirúrgicamente y someterse a un largo proceso de recuperación, según también se desprende de la referida historia clínica aportada al plenario.

Está entonces acreditado el hecho y los daños ocasionados a la demandante, señora Paola Andrea Sierra Gómez.

6. Ahora en cuanto a la culpabilidad se debe precisar que la responsabilidad se encuentra dada por la falta de diligencia o cuidado en la conducta que se le atribuye al demandado.

Del interrogatorio rendido por la señora Paola Andrea Sierra Gómez, se logra establecer que la accionante ingresó al juego de “*pelotas humanas*” a través de la compra en la taquilla de un ticket, en el que no se advertía de riesgos de la atracción, no hubo orientación sobre cómo funcionaba el juego, no había señales de advertencia, no existió un consentimiento informado; tampoco se le refirió a alguna contraindicación o sugerencia respecto de los zapatos que usaba o del atuendo que portaba, “accedí a través de la taquilla, nos venden 4 boletas sin advertir riesgo alguno; en las boletas no había ninguna advertencia (...) la persona me la coloca -la pelota- sin hacerme ninguna advertencia sobre los zapatos, solo estire los brazos, me coloca la pelota e inicia el juego”.

Frente a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el representante legal de la demandada, señor Francisco Uriel Duque Zuluaga, fue evasivo en varias de sus respuestas, y con ello con fundamento en el art. 205 CGP., debe tenerse por ciertos los siguientes hechos i) no hubo información a la demandante Paola Andrea Sierra Gómez sobre las precauciones que debía tomar para el buen uso de la atracción, ii) no se le hizo ninguna advertencia sobre el calzado que llevaba puesto para ingresar a la atracción, iii) los empleados que dirigían la atracción no le dieron las respectivas instrucciones, iv) la boleta adquirida y que permitía el ingreso a la atracción no contenía ningún tipo de aviso o instrucción, v) no existió al momento del hecho objeto de indemnización algún protocolo de seguridad para ese tipo de juegos, vi) no existió para aquel momento

la elaboración de algún consentimiento informado para ser suscrito por los usuarios de ese juego, con advertencias, riesgos y recomendaciones, y, vii) no había personal capacitado para la época que diera indicaciones precisas y correctas de cómo se jugaba en las “pelotas humanas”.

A ello se añade que los testigos aportados por la parte actora, pese a que son familiares de la víctima, fueron unánimes en señalar que ninguna persona les hizo advertencias sobre las precauciones a tomar en el mencionado juego, ni en la taquilla o en la boleta se les dio a conocer las limitaciones de calzado o prohibiciones para participar en dicha atracción.

Muy a pesar de que el testigo Daniel León señaló que al momento del insuceso habían protocolos para el desarrollo del juego, entre ellos limitaciones o prohibiciones de uso de determinado calzado para participar en esa atracción, que fue informado de que se le había prohibido expresamente a la demandante Paola Andrea Sierra Gómez participar del juego por los zapatos que estaba usando y de ello quedó memoria, no dio referencia de quienes eran las personas que estaban coordinando la dinámica, ni sus nombres.

Tampoco dio cuenta de dónde estaba la memoria de lo ocurrido. Si bien el señor León mencionó que había una minuta en la que se anotó lo acontecido antes de la entrada de la señora Sierra Gómez al lugar del juego, no existe esa prueba en el proceso ni se indicó dónde podía conseguirse la misma. Además, él no fue testigo presencial de lo que habría acontecido el 18 de febrero de 2017, sino que su versión la basó en lo que pudieron informarle terceros, sin que exista suficiente soporte de lo afirmado en el material probatorio.

Es más, y por importar al presente asunto, el Despacho se refiere a la resolución número 67541 del 1 de noviembre de 2012 emanada de la Superintendencia de Industria y Comercio, en donde se establecieron los peligros potenciales que entraña el “balón inflable para caminar” debido a sus características:

- Asfixia.
- Ahogamiento —cuando es utilizado sobre agua—.
- Magulladuras, luxación o fracturas, entre otras lesiones a causa de golpes.
- Afectaciones a la salud por falta de asepsia.
- Conmoción, pánico, zozobra o claustrofobia.

En dicha decisión, concluyó el órgano de vigilancia que i) la actividad recreativa relacionada con el producto denominado, entre otros, como “Burbujas humanas”, “Balón para caminar”, “Pelota inflable para caminar”, “Balón inflable para caminar” o cualquiera otro en el que se verifiquen iguales características y especificaciones no obstante su denominación, presenta riesgos irrazonables para la salud o integridad de los consumidores cuando se ejecuta por un operador que no cumple con lo dispuesto en la Ley 1225 de 2008 y la Resolución 958 de 2010, en tales circunstancias, el producto atenta contra la vida o la seguridad de los consumidores, ii) lo mismo ocurre cuando el referido producto lo usa una persona que no utiliza operarios —controladores— capacitados especialmente en el desarrollo del entretenimiento, y, iii) para utilizar la atracción debe realizarse previamente el registro ante la autoridad distrital o municipal y cumplir con todos los requisitos, programas, procedimientos y manuales diseñados por el legislador para mitigar los riesgos que representan para los usuarios esta clase atracciones.

Y además dispuso, entre otras circunstancias, la SIC:

“PERMITIR como medida definitiva la prestación del servicio de uso y alquiler del producto denominado “Esferas Acuáticas”, “Esferas Acuáticas Inflables”, “Burbujas Acuáticas”, “Esfera para Agua”, “Acuesferas”, “Burbujas Humanas**”, “**Balón para caminar**”, “Water Ball”, “Pelota inflable para caminar”, “Balón inflable para caminar” o cualquier otro en el que se verifiquen iguales características y especificaciones no obstante su denominación**, siempre y cuando la actividad recreativa sea controlada directamente por el operador y/o prestador del servicio **quien deberá cumplir con el registro previo, programas, manuales, procedimientos y todos los demás requisitos previstos en la ley 1225 de 2008 y la resolución No. 0958 de 2010, mandato de carácter general que resulta vinculante para todo aquél que ponga el producto en el mercado Colombiano llámese importador, fabricante, distribuidor, comerciante, operador o que de alguna manera venda o preste servicios de uso y alquiler, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia**”.

En el caso objeto de estudio, ningún reparo le mereció a la demandada acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley 1225 de 2008, para poner en funcionamiento la referida atracción.

Lo anterior, evidencia que la Sociedad demandada pecó por reprochable omisión, en tanto que en el expediente no se demostró que existieran instrucciones de personal debidamente capacitado sobre el correcto uso del juego, además de información y advertencias de los riesgos que implicaba acceder a él.

Es más, nótese que quien utiliza ese tipo de atracciones lo hace con el afán de divertirse y no tiene por qué asumir que su integridad corra peligro físico alguno si hace uso de la misma de acuerdo con las instrucciones que les proporcionaran las personas encargadas, lo que - se itera- no se dio en el presente juicio, incurriendo en una comprometedora desatención, de suyo relevante para producir el accidente y por contera, el daño que se reclama.

En este sentido, al margen de que *“las pelotas eran de otro señor”* para el momento de los hechos, como lo afirmó el representante legal de la demandada, lo cierto era que el juego se desarrollaba en las instalaciones del establecimiento de comercio de propiedad de la accionada y con ello una responsabilidad indirecta en cabeza de la persona jurídica accionada; *“existe un régimen especial que consiste sustancialmente, en que cuando el daño se causa en ejercicio de una actividad de una persona es una responsabilidad indirecta que se atribuye al patrono, que en este caso es la entidad demandada, o sea bajo la cual estaba a su cargo, y es responsable por las fallas o deficiencias de sus empleados o de la mala o deficiente organización existente en su establecimiento, y el daño ocasionado por la falla en la atención prestada al cliente es atribuible al establecimiento de comercio...”*².

Es que, si la demandada prestadora de la atracción, hubiera tomado las medidas preventivas que la actividad exigía para un correcto funcionamiento entre ellos la vestimenta que se debía portar o las advertencias, el accidente de la señora Paola no se habría producido o por lo menos hubiera ingresado al juego bajo su propio riesgo, de donde

² Ibidem

resulta la influencia causal de la omisión que se le increpa y, por tanto, la nítida relación causa efecto entre el accidente y la conducta omisa de la demandada.

Puestas así las cosas, como se acreditó en el proceso la existencia del hecho que generó el daño a la señora Paola Andrea Sierra Gómez, la culpa del daño atribuible a la sociedad demandada, y el nexo de causalidad entre aquellos, concluye el Despacho que el daño producido a la demandante como consecuencia del accidente acaecido el 18 de febrero de 2017, debe ser resarcido por el extremo pasivo convocado.

7. Ahora bien, en lo que toca a los perjuicios deprecados por la parte actora, ha de decirse que los medios de prueba aportados a este juicio logran evidenciarlos parcialmente, veamos los motivos:

7.1. Solicita la demandante por daños materiales i) daño emergente \$1.713.300 por los gastos en que incurrió por concepto de transportes y terapias físicas, y del medicamento denominado UNASYN 750 MG, y ii) lucro cesante, consistente en lo que la señora Sierra Gómez dejó de percibir durante los 6 meses que estuvo incapacitada, a razón de \$1.627.000, para un total de \$12.042.116.

Frente al daño emergente, por los gastos en que incurrió se allegó un cuadro que de manera general, refiere a la asistencia a terapias físicas y a unos costos que no se observa su pago efectivo, pues al respecto no hay aceptación por parte de la prestadora del servicio, y con ello terminan por ser pruebas elaboradas por la demandante, desconociendo que en derecho nadie tiene el privilegio de hacer prueba con su propio dicho.

En este sentido, la jurisprudencia patria ha señalado que “*es verdad que, con arreglo al principio universal de que nadie puede hacerse su propia prueba, una decisión no puede fundarse exclusivamente en lo que una de las partes afirma a tono con sus aspiraciones. Sería desmedido que alguien pretendiese que lo que afirma en un proceso se tenga por verdad, así y todo sea muy acrisolada la solvencia moral que se*

tenga. De ahí que la Corte Suprema de Justicia haya dicho en un importante número de veces... que ‘es principio general de derecho probatorio y de profundo contenido lógico, que la parte no puede crearse a su favor su propia prueba. Quien afirma un hecho en un proceso tiene la carga procesal de demostrarlo con alguno de los medios que enumera el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, con cualesquiera formas que sirvan para formar el convencimiento del Juez. Esa carga... que se expresa con el aforismo onus probandi incumbit actori no existiría, si al demandante le bastara afirmar el supuesto de hecho de las normas y con eso no más quedar convencido el Juez (Sent. de 12 de febrero de 1980)’³.

Ahora, respecto de las suma de dinero correspondientes al llamado “*lucro cesante*”, debe tenerse en cuenta que este consiste en el detrimento patrimonial que sufre la víctima en razón a no poder percibir algunos ingresos; pérdida que se produce como consecuencia directa del daño inferido y concatenado a ella, debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual.

En el presente asunto la certificación expedida por la contadora Ana Elsa Vaca Chitiva da cuenta que a la época de los hechos percibía una remuneración a título de honorarios por su labor como administradora de un conjunto residencial, en cuantía de \$1’627.000 (folio 118), documento de carácter declarativo que amerita crédito, máxime que no fue objeto de ratificación previa petición del extremo accionado.

Téngase en cuenta que no es menester aportar el texto del contrato de trabajo (que se entiende no existe por corresponder la remuneración al reconocimiento de otra modalidad contractual), ni otro elemento documental que acredite la relación contractual, pues, esa clase de negocios no está sometido a solemnidades para otorgarles mérito o efecto alguno.

³ Cas. civ. de 9 de noviembre de 1993. G.J. CCXXV, pág. 405”.

En este sentido, se acoge la estimación jurada que hizo la accionante basada en ese ingreso, por el tiempo en que estuvo sin trabajar seis meses, de modo que se impondrá como condena por lucro cesante la suma de \$12'042.116.

Cabe señalar que el hecho de que se hubiera pagado incapacidad por parte de la EPS no enerva la posibilidad del reconocimiento de dicho monto a título de lucro cesante, toda vez que sus fuentes son diferentes. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:

“las prestaciones a cargo del Sistema de Seguridad Social cumplen una función distinta, y no dependen de que se demuestren los elementos de la responsabilidad. No hay, por tanto, ninguna razón jurídica para prohibir la acumulación de esas prestaciones, ni puede decirse que ellas constituyan un “lucro” que deba restarse de la indemnización de perjuicios a la que tienen derecho los demandantes. Se niega, por tanto, esta excepción” (Sentencia SC 780 del 10 de marzo de 2020, exp. 2010 00053 01).

Adicionalmente, pese a que se objetó la estimación jurada, no existen elementos de juicio para considerar que está fundada tal reparo en torno al lucro cesante, y más bien, está sustentado en la prueba documental ya soportada y tampoco existe impedimento para que, a pesar de haberse reconocido incapacidades por parte de la E.P.S. a la que estaba afiliada la demandante, se le reconozca suma alguna por concepto de lucro cesante.

7.2. Por daño moral: Paola Andrea Sierra Gómez (40SMMLV - \$33.124.640-), Leonardo Fabio Sierra Godoy (30SMMLV -\$24.843.480-, Ana Sofia Sierra Sierra (30 SMMLV -\$24.843.480-), y, Martha Cecilia Gómez (10 SMMLV -8.218.160-).

En cuanto al daño moral, tenemos que pertenecen a la esfera íntima del individuo, y sólo quien padece el dolor subjetivo conoce su intensidad, por lo que acreditarlo de forma objetiva es inadecuado, por cuanto no sería comunicado en su verdadera dimensión. De ahí,

entonces, le corresponde al arbitrio judicial señalarlos, según jurisprudencia reiterada de la Corte Suprema de Justicia⁴.

Los daños morales a cuyo resarcimiento se condenará a los demandados, no será reconocido en la forma (en SMMLV), ni por el monto que reclamo la parte actora.

Lo primero, por cuanto, en razón de ser la cuantía de los daños morales *“un asunto que queda reservado al justo criterio del fallador, y como quiera que no se trata en este evento más que mitigar el dolor que sufre los demandantes a consecuencia del hecho dañoso, y no en estricto sentido a una reparación propiamente dicha, no tendría sentido acudir a patrones (corrección monetaria, dólar, uvr) cuya utilidad práctica consiste en mantener en el tiempo la tasación del daño, en servir de correctivo de la desvalorización de la moneda nacional, que con el paso del tiempo pierde su poder adquisitivo y por lo tanto hace irrisoria una suma fijada en pesos, a modo de indemnización por equivalente”*⁵.

Lo segundo, como quiera que el daño irrogado a la señora Sierra Gómez por dicho concepto se circunscribe al tiempo que duró incapacitada y los padecimientos entre una y otra cirugía y con ello la aflicción que pudo causar en su cónyuge, hija y madre.

Así las cosas, por daño moral, se reconocerá a la señora Sierra Gómez **\$15.000.000** y a los demás demandantes (**cada uno**) **\$6.000.000**, en consideración a la aflicción que, en forma proporcional tanto el uno como el otro se vieron forzados a soportar, Paola Andrea, por cuanto fue quien en su propia humanidad sufrió los dolores del accidente y fracturas generadas en su pierna y con ello las intervenciones quirúrgicas, y, Leonardo Fabio Sierra Godoy, Ana Sofia Sierra Sierra, y, Martha Cecilia Gómez Valcárcel¹, quienes soportaron todas las preocupaciones e inconvenientes que, se presume generó en ellos la noticia del accidente, cirugías, recuperación y la subsiguiente incapacidad temporal (frente a la menor Ana Sofia pese a un edad, la ausencia de su madre).

⁴ Cas. civ. de 30 de junio y 8 de octubre de 2005.

⁵ CSJ. Sent. 17/08/2001, exp. 6492

7.3. Frente a i) la salud la suma de 40 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, y, ii) a la vida de relación \$16.562.320.

En lo que concierne a los daños a la salud, empecemos por decir que la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia en su Sala de Casación Civil mantiene una línea de reconocimiento edificada sobre la noción del daño a la vida de relación, en el marco de la cual se destaca el derecho a la salud como un bien jurídico de especial protección.

El daño a la vida de relación ha sido entendido como «*un menoscabo que se evidencia en los sufrimientos por la relación externa de la persona, debido a ‘disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad’*, que por eso queda limitado a tener una vida en condiciones más exigentes que los demás, como enfrentar barreras que antes no tenía, conforme a lo cual actividades muy simples se tornan complejas o difíciles» (SC22036, 19 dic. 2017, rad. n.º 2009-00114-01).

En la presente controversia la demandante señaló que, con ocasión del accidente, dejó de realizar las actividades y hábitos propios de una vida en pareja, y de interactuar con su menor hija; dichas actividades le reportan placer a su vivir y se vieron truncadas después del suceso objeto de reparación, y durante el tiempo de la incapacidad otorgada por los galenos tratantes, cuestión que en sí misma -el de la incapacidad- y de acuerdo a las reglas de la experiencia ya constituye en menoscabo sufriendo una alteración en su vida personal y familiar que modifica su "modus vivendi", lo cual permite establecer la existencia del perjuicio causado.

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la demandante ha recuperado en gran parte su salud pues en el plenario no obra elemento de prueba que permita establecer que actualmente y con ocasión del

hecho dañino se encuentre limitada para el ejercicio de sus labores profesionales y de interacción con su familia, por lo que la cuantificación del daño en atención al *arbitrio iudicis* (que por supuesto no debe ser arbitrario y que implique un enriquecimiento para la víctima, se tuvo en cuenta en el presente asunto, la edad de la demandante, su estado de salud actual -historia clínica-, la reanudación de sus actividades profesionales y la ausencia de una calificación de pérdida de capacidad laboral) se fijará en ocho millones de pesos **(\$8.000.000)**.

No se reconocerá suma alguna por concepto de daño a la vida de relación y a la salud a favor del señor Leonardo Fabio Sierra Godoy, pues no se demostró en qué forma se afectó su salud y su capacidad de interacción o vínculo con las demás personas y su núcleo familiar.

8. Finalmente, el Despacho hace alusión al llamado en garantía que hace el demandado a Seguros del Estado S.A., pues este tiene como fin garantizar los perjuicios ocasionados con la actividad desarrollada por el restaurante Museo Bar El Transportador SAS., en Liquidación., que como consecuencias patrimoniales o económicas que resultan de responsabilidad bien sea contractual o extracontractual, “se convierten en riesgos perfectamente asegurables”, que se pueden trasladar total o parcialmente, a la compañía aseguradora, ésta se halla en la obligación de salir a responder por las sumas aseguradas o por el monto del perjuicio que se llegara a declarar, en caso de que sea inferior al riesgo asegurado, los intereses moratorios que se causen en la dilación del pago, las costas y gastos del proceso, como lo consagra el artículo 84 de la ley 45 de 1990, con las consecuentes restricciones a que contrae el artículo 1055 del Código de comercio.

Pues bien, en primer lugar debe precisarse que tal como lo argumentó la llamada en garantía y según se lee del clausulado general, la póliza que debe afectarse para cubrir situaciones como las que aquí se discuten es la No. 37-02-101001029 “amparar los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, con motivo de la responsabilidad civil extracontractual en que incurra de acuerdo con la legislación colombiana por lesiones o muerte a personas y/o daños a bienes a

terceros, causados durante el giro normal de las actividades del asegurado, dentro del territorio colombiano...”, cuyo valor asegurado asciende a la suma de \$1.000.000.000 con un deducible del 10%, estando en vigencia para el día en que ocurrió el accidente -18 de febrero de 2017.

Ahora bien, revisada la póliza observa el despacho que, dentro de las exclusiones estipuladas no se configura ninguna de las circunstancias que emanan del presente asunto, específicamente no se da la referida por la llamada en garantía y que corresponde a “mantener los predios y los bienes y los bienes inherentes a la actividad en buen estado de conservación y funcionamiento. Cumplir con los respectivos reglamentos administrativos, legales y técnicos inherentes a la actividad. Protecciones, señalización preventiva diurna, nocturna, vehicular y peatonal”, pues la mencionada póliza cubre la responsabilidad civil extracontractual que recae sobre el asegurado en forma directa por daños ocasionados en forma directa por actividades del asegurado y su personal, razón por la cual la aseguradora Seguros del Estado S.A., debe entrar igualmente a responder por los perjuicios generados por el extremo pasivo, sin embargo, la aseguradora podrá realizar el 10% del deducible pactado.

9. En suma, se declararán no probadas las excepciones de “cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa y responsabilidad del daño”, propuestas por el demandado frente al escrito inicial y las propuestas por el llamado en garantía que denominó “perjuicios o daños inexistentes”, “hecho exclusivo de la víctima”, “la cobertura otorgada por las pólizas se encuentra circunscrita a las condiciones especificadas en las mismas” y “cumplimiento de garantías”, imponiéndose las condenas ya descritas en líneas anteriores.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Treinta y Siete Civil del Circuito de Bogotá D. C., administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley:

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS las excepciones de “cobro de lo no debido, enriquecimiento sin causa y responsabilidad del daño”, propuestas por el demandado frente al escrito inicial y las propuestas por el llamado en garantía que denominó “perjuicios o daños inexistentes”, “hecho exclusivo de la víctima”, “la cobertura otorgada por las pólizas se encuentra circunscrita a las condiciones especificadas en las mismas” y “cumplimiento de garantías”, con fundamento en lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Declarar al demandado **SOCIEDAD DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL TRANSPORTADOR SAS EN LIQUIDACION.**, civilmente responsable por los daños causados a la señora **PAOLA ANDREA SIERRA GOMEZ**, con ocasión al accidente ocurrido el día 18 de febrero de 2017 en su establecimiento de comercio.

CUARTO: Condenar al demandado **SOCIEDAD DESTREZA RESTAURANTE MUSEO BAR EL TRANSPORTADOR SAS EN LIQUIDACION.**, a pagar a favor de la demandante Paola Andrea Sierra Gómez la suma de **\$12'042.116** a título de lucro cesante. Por concepto de daños morales la suma de **\$15'000.000** y por daño a la vida de relación, la cuantía de **\$8'000.000**.

A favor de los demandantes **LEONARDO FABIO SIERRA GODOY, ANA SOFIA SIERRA SIERRA, y, MARTHA CECILIA GOMEZ VALCARCEL**, a título de daño moral la suma de **\$6'000.000** para cada uno, y a cargo de la sociedad demandada.

Los demás perjuicios reclamados y no mencionados en esta sentencia se entienden denegados.

QUINTO: la llamada en garantía **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, cubrirá los montos antes mencionados hasta el límite pactado en el contrato de seguro No. 37-02-101001029, teniendo en cuenta el deducible del 10% acordado, que estará a cargo del demandado.

QUINTO: CONDENAR en costas del presente proceso al extremo demandado y al llamado en garantía, para lo cual se señala como agencias en derecho la suma de \$5'000.000 a cargo de cada uno de ellos. Liquidense.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



HERNANDO FORERO DÍAZ

Juez

**JUZGADO TREINTA Y SIETE CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ
SECRETARÍA**

Bogotá, D.C. 25 de febrero de 2021

Notificado por anotación en ESTADO No. 025 de esta misma fecha.-

El Secretario,

JAIME AUGUSTO PEÑUELA QUIROGA

Firmado Por:

HERNANDO FORERO DIAZ

JUEZ

**JUEZ - JUZGADO 037 DE CIRCUITO CIVIL DE LA
CIUDAD DE BOGOTÁ, D.C.-SANTAFÉ DE BOGOTÁ D.C.,**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación:

**01095997a3b6310767cc6cb52ccd57bd9d9e142cd2884bcf11d69
7fe7e68c4c4**

Documento generado en 24/02/2021 07:54:11 PM

**Valide éste documento electrónico en la
siguiente URL:**

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>

JUZGADO TREINTA Y SIETE CIVIL DEL CIRCUITO

Bogotá D. C., veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintiuno (2021).

Ref: EJECUTIVO No. 11001 31 03 037 2021 00015 00

Reunidos los requisitos previstos en el estatuto procesal civil para este tipo de procesos, el despacho RESUELVE:

Librar mandamiento de pago por la vía *ejecutiva* a favor de **JOHN JAIME BUSTOS TORRADO.**, en contra de **CARLOS ANDRES SILVA LOPEZ y, MARIA JIMENA SILVA LOPEZ.**, por las siguientes sumas de dinero:

Pagaré No. 001

1. La suma de \$180.000.000 por concepto de saldo de capital representado en el pagaré aportado como base de la acción.

2. Por los intereses de plazo sobre el referido capital, desde el 1 de noviembre de 2018 y hasta el 31 de octubre de 2019, a la tasa máxima legal autorizada.

3. Por los intereses moratorios a la tasa máxima legalmente permitida, calculados sobre el referido capital desde el 1° de noviembre de 2019 y hasta que se verifique el pago total de la obligación.

Sobre costas se resolverá oportunamente.

Oficiese para los fines establecidos en el artículo 630 del Estatuto Tributario.

Ordénese a la parte ejecutada pagar la obligación dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación que de este proveído se le haga en la forma establecida en el artículo 431 CGP y/o el término de diez días para formular excepciones de acuerdo a lo previsto en artículo 442 ibidem.

Notifíquese esta providencia a la parte demandada, en la forma prevista por los artículos 291 y 292 ibidem, en armonía con el artículo 8° del Decreto 806 de 2020

Se reconoce al abogado Alexander Méndez Cárdenas como apoderado judicial de la demandante en los términos y con las facultades del poder conferido.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



HERNANDO FORERO DÍAZ

Juez (2)

*JUZGADO TREINTA Y SIETE CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C.*

*La providencia anterior se notificó por anotación en el
estado No. 024 de hoy 25 de febrero de 2021, a las 8:00
a.m.*

El secretario,

JAIME AUGUSTO PEÑUELA QUIROGA

